Asamblea General del Profesorado, UdeA
Miércoles 21 de mayo de 2025
(Relatoría)

Orden del Día:

1. 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Informes.
2. 10:00 a.m. a 12:00 m. Intercambio con la Directora de Regionalización, profesora Nora Eugenia Muñoz Franco
3. 12:00 m. a 1:00 p.m. Propositiones y varios.

Moderación: Diana Sirley Tabares, representante profesoral ante el Comité de Regionalización; Jhon Jairo Rojas y Karina Motato, miembros de la Junta Directiva de Asoprudea.

Relatoría: Asume el compromiso Sara Castro G., comunicadora de Asoprudea.
133 participantes virtuales

Desarrollo e intervenciones:

1. Informes

- **Sindicato ASPU.** Presidente del sindicato, profesor Alejandro Puerta

La asamblea inició con la intervención del presidente del sindicato ASPU, quien contextualizó la jornada a partir de la expedición del Decreto de Formalización Docente y de Empleados en Instituciones de Educación Superior, emitido el 1.º de abril por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República.

Este decreto es producto de una negociación intersindical realizada durante 2023, en la que participaron Fecode, ASPU y otras organizaciones. Representa un compromiso estatal de avanzar hacia la formalización del trabajo docente, un objetivo ambicioso pero necesario, y representa un avance importante hacia la estabilidad laboral del cuerpo docente.

El profesor Alejandro Puerta extendió la invitación al Foro Regional de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el auditorio de Ingeniería, convocado por ASPU, SINDISER y SINTRAUNICOL, con la participación de:

- Dr. Fabio Alberto Rivera – abogado laboralista
- Dr. Carlos Ballesteros – experto en educación superior
- Prof. Henry Mosquera – Universidad del Valle
- Prof. Marta Salamanca – referente en formalización docente
- Prof. Lizeth Campo – Universidad del Cauca
- Prof. Rubén Moreno – Ministerio de Educación Nacional
- Posible participación del Ministro de Trabajo o su delegado

El evento busca generar un espacio académico y sindical de análisis sobre el decreto, sus implicaciones jurídicas y su viabilidad financiera, además de conocer experiencias exitosas de otras universidades.

Ya se ha tenido un primer acercamiento con la Vicerrectoría de Docencia —hoy convertida en Vicerrectoría General— y consideran fundamental que la Universidad cumpla los plazos establecidos por el decreto. De manera general, este establece que, para 2026, al menos el 40 % de la planta docente debe estar formalizada, y para 2027, el 80 %.

Desde ASPU, se viene trabajando activamente en la construcción de propuestas viables. Participando en el Congreso Nacional de Profesores de Cátedra en Bucaramanga, y mañana continuar esta conversación en el foro, al que han invitado también a las representantes profesoras del Consejo Superior y del Consejo Académico, así como a las directivas de la Universidad.

Según cifras compartidas en diciembre, la Universidad cuenta con:

- Docentes de cátedra: 6.000 aprox.
- Docentes ocasionales: 650
- Docentes vinculados: 1.200
- Trabajadores administrativos: 2.500

Se señaló que los procesos de formalización difieren entre docentes y empleados. Los empleados están cubiertos por la Ley 909, mientras que para el cuerpo docente se requiere un modelo adaptado a su realidad laboral. Se requiere una ruta distinta, aunque todos hacemos parte del mismo proceso de dignificación laboral.

Con base en ejercicios técnicos realizados junto al profesor Ramón Javier, la propuesta sindical de implementación de ASPU incluye:

1. Etapa 1: Formalización de los 650 docentes ocasionales.
2. Etapa 2: Formalización progresiva de 800 docentes de cátedra bajo un modelo de concurso especial para docentes con vocación de permanencia.
3. Modelo financiero a 30 años, presentado previamente a la Universidad.
4. Priorización de plazas existentes y disponibilidad presupuestal, con base en ejercicios técnicos realizados junto al profesor Ramón Javier.

Se insiste en que no se trata de eliminar el concurso público, sino de garantizar una transición justa y organizada que reconozca la trayectoria de los docentes actuales. Ruta de trabajo propuesta:

- Diagnóstico institucional de necesidades
- Diseño participativo del plan de formalización
- Definición de responsables y cronograma
- Análisis financiero con acompañamiento técnico

- Implementación gradual y sostenida
- Participación de sindicatos, representantes profesoraes y administrativos

Invita a toda la comunidad universitaria a sumarse a este proceso que, sin duda, marcará un antes y un después en las condiciones laborales del profesorado.

- **Representante profesoral en el Comité de Austeridad.** Profesora de cátedra, María Patricia Álvarez Castrillón, CIFAL.

La profesora, representante profesoral en el Comité de Austeridad, informó que en una primera reunión se hizo el análisis del presupuesto institucional, el cual está disponible públicamente. Así mismo, sobre la elaboración de un formulario para la comunidad universitaria, que permitirá participar activamente en el desarrollo del plan de austeridad.

Manifestó preocupación por la falta de convocatoria oficial de la Universidad para formular el plan de formalización, el cual debe construirse junto a los sindicatos, como lo establece el decreto. Recordó que:

- La mesa bipartita nacional con el Ministerio de Educación está activa desde 2023.
- El plan debe presentarse en un plazo de seis meses. Y hasta ahora no han sido convocados.
- No puede abrirse ningún concurso sin dicho plan aprobado. Esto es un requisito normativo y debe cumplirse.

Finalmente, reiteró la invitación al foro del día siguiente, señalando que se discutirán temas cruciales como el presupuesto, los mecanismos de implementación y las experiencias de otras instituciones que ya avanzan en el proceso.

- **Representantes profesoraes ante el Consejo Académico.** Profesoras Claudia Puerta y Yadira Borrero

La profesora Claudia Puerta inició su intervención resaltando que, debido al tiempo transcurrido desde la última asamblea, se han desarrollado múltiples sesiones del Consejo Académico y del Comité de Vicedecanos, en las cuales se han abordado diversos temas relevantes para el profesorado.

Uno de los principales temas ha sido el análisis que adelanta la Vicerrectoría de Docencia sobre la figura de dedicación exclusiva, una de las modalidades de vinculación docente en la Universidad de Antioquia, junto con tiempo completo y medio tiempo.

- Por normativa, la dedicación exclusiva puede ser otorgada a un máximo del 30 % del profesorado, aunque en la práctica solo el 15 % accede a esta modalidad.
- La Vicerrectoría propone una mejor orientación y regulación del acceso a dicha figura, por lo que se hace un llamado al profesorado a participar activamente en los debates que surgirán al respecto.

También se ha discutido sobre la reformulación de los planes de trabajo docente, a partir de una propuesta impulsada por el Consejo Superior Universitario, particularmente por el Secretario de Educación del departamento y exrector, Mauricio Alviar.

- La preocupación desde la representación profesoral es que las propuestas no reflejan adecuadamente la diversidad de funciones que cumple el profesorado.
- Se observa una tendencia a incrementar la carga de docencia directa, con el argumento de reducir la contratación por cátedra, lo cual ha generado inquietud.

Además, se destacó que la Resolución Rectoral 13762, que regula actualmente el plan de trabajo, fue concebida como temporal hace casi 20 años, y su modificación requiere una amplia participación del profesorado, dado que impacta directamente en la comprensión y regulación de las actividades académicas.

Se han presentado también informes sobre:

- Regionalización: Se busca mejorar la articulación con los campus regionales.
- Posgrados: Hay preocupación por restricciones en los procesos de apertura de nuevos programas, como los comunicados recientes de la Facultad de Ingeniería que cuestionan el aumento en los requisitos de ingreso. (punto de corte mínimo para el doctorado)
- Investigación: Se abordó el tema de los costos ocultos en investigación, que no están siendo reconocidos en presupuestos presentados ante entidades financiadoras, lo cual impacta la formulación de proyectos.

Todo esto se vincula con la necesidad de repensar los planes de trabajo y la distribución del tiempo entre docencia, investigación, extensión, formación continua, participación gremial y gestión académica.

La profesora recordó que se vienen realizando Ateneos los últimos jueves de cada mes, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., como espacios abiertos de diálogo entre todas las representaciones profesorales. Se llevan a cabo de forma presencial en la Sala de Juntas del Edificio de Extensión y también por Zoom.

Se invita a participar activamente en estos espacios de articulación gremial. La profesora subrayó que en las tres últimas sesiones del Consejo Académico se ha insistido en la urgencia de convocar a todo el profesorado para participar en la construcción del diagnóstico y del plan de formalización. Esto, en consonancia con los lineamientos nacionales y experiencias que serán compartidas en el foro regional.

Finalmente, la profesora Claudia informó sobre la reciente modificación al Acuerdo Superior 342 de 2007, que regula los concursos de méritos docentes. Las reformas incorporan dos novedades:

1. Principio de equidad de género: Las unidades académicas con menos del 40 % de representación femenina en su planta docente podrán abrir concursos exclusivamente para mujeres, con el objetivo de cerrar brechas históricas.
2. Inclusión lingüística: Se permite que personas sordas señas puedan validar el español como su segunda lengua para efectos de concurso, si su lengua materna es la lengua de señas.

Se reconoce que estas medidas pueden generar debate, por lo cual se invita a generar espacios de diálogo que contribuyan a una comprensión amplia y constructiva del sentido de estas reformas.

La profesora Yadira Borrero, informó que la profesora Olga Restrepo, Representante suplente ante el Consejo Superior Universitario, le había comunicado que el profesor Pablo no podía asistir a la asamblea debido a una situación familiar, y que ella se encontraba en clase. Por tanto, no tenían información adicional que compartir en este espacio. Indicó también que varios de los asuntos discutidos en el Consejo Superior serían presentados por ella o por la profesora Claudia.

Adicionalmente, mencionó que la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Académicos, está programada para esa misma tarde, por lo que no había novedades recientes desde dicha instancia.

Finalmente, compartió una información importante: junto con la profesora Claudia, están gestionando con la Oficina de Comunicaciones y la Secretaría General de la Universidad, la publicación de los informes escritos de representación profesoral en la página web del Consejo Académico. El objetivo es garantizar el acceso abierto del profesorado a esta información, y que puedan consultarla directamente. Indicó que, una vez habilitado el espacio, se notificará oportunamente a través de los canales correspondientes.

- **Representantes profesorales al Consejo Superior Universitario.** Profesores María Isabel Duque y Mauricio Múnera

Aunque aún no se ha realizado su primera sesión como representantes ante el Consejo Superior Universitario (programada para el 17 de junio), los profesores compartieron un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad profesoral por la participación en las recientes elecciones, en las que se presentaron cinco planchas y se obtuvo una alta votación. Anunciaron que su trabajo en el Consejo se enfocará en cinco ejes estratégicos:

1. Defensa de la educación superior pública como un derecho humano, inclusivo, equitativo y de calidad.
2. Dignificación de la labor docente, en un contexto de crisis en el que se ha responsabilizado al profesorado de los problemas financieros de la universidad.
3. Fortalecimiento del proyecto público universitario, como bien común.
4. Superación de la crisis financiera, mediante el diálogo y la construcción colectiva de soluciones.

5. Democratización del gobierno universitario, con reformas estatutarias que amplíen la participación del profesorado en la toma de decisiones.

Concluyeron reiterando su compromiso de mantener comunicación constante con el cuerpo profesoral, participar activamente en las asambleas e informar de manera transparente sobre su gestión en el Consejo Superior.

- **Junta Directiva de Asoprudea.** Profesor Jhon Jairo Rojas Camargo, presidente.

Ante la inquietud de un profesor, sobre la participación gremial y el papel que ha tenido Asoprudea en anteriores asambleas, cuando la organización se mantuvo ausente, incluso llegando a oponer a decisiones tomadas colectivamente en estos espacios. Expresó su interés en escuchar un informe por parte de esta nueva dirección, con el fin de conocer el enfoque que asumirá en su gestión.

Además, planteó la necesidad de saber si se mantiene la misma postura institucional que, según indicó, se evidenció el año anterior cuando Asoprudea promovió un reglamento para la Asamblea General de Profesores, reforma que, a su juicio, pretendía reglamentar el funcionamiento de la Asamblea por encima de normas constitucionales. Finalmente, destacó la importancia de abrir este diálogo, tanto para afiliados como no afiliados a la asociación, con el propósito de fortalecer el entendimiento mutuo dentro del profesorado.

El presidente de la nueva Junta Directiva, respondió a sus inquietudes, destacando que este año se ha dado una renovación casi total en la dirección de la asociación. Afirmó que quienes integran la nueva junta, en su mayoría, no provienen del activismo gremial tradicional, sino del ámbito académico, y que su intención es tender puentes, construir consensos y trabajar conjuntamente con otros espacios y organizaciones del profesorado.

Señaló que han sostenido reuniones con las representantes profesorales tanto ante el Consejo Académico como el Consejo Superior, y que se están organizando asambleas conjuntas, como parte de una política de apertura y trabajo articulado. Asimismo, indicó que están revisando los acuerdos previos, incluidos aquellos relacionados con el reglamento de la Asamblea General, en busca de tejer consensos y evitar divisiones en el profesorado.

En cuanto a las actividades de Asoprudea, informó que han desarrollado una agenda académica y cultural para congregar al profesorado, incluyendo eventos como el conversatorio con la senadora María José Pizarro, en conmemoración del Día de la Mujer, y una actividad con el profesor Leopoldo Múnera para celebrar el Día del Docente. También se realizó un evento masivo en el auditorio Camilo Torres como homenaje a los y las docentes de la Universidad.

Reiteró que la política de Asoprudea este año será de apertura total a los espacios colectivos, participando activamente en todas las asambleas, sin importar quién las convoque. Señaló que ya se han ofrecido las instalaciones de la asociación (bloque 22) para realizar encuentros como los Ateneos, incluso con modalidad mixta (presencial y virtual), si así se requiere.

También mencionó que se han realizado campañas de afiliación con presencia directa en varias facultades y dependencias, así como reuniones con grupos de docentes preocupados por las medidas de austeridad y sus efectos, como el retraso en pagos a cátedra y proveedores, y la reducción de recursos para el desarrollo docente.

Finalmente, ofreció continuar ampliando la información y el diálogo con el profesorado.

- **Intervenciones:**

Una profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, intervino para poner sobre la mesa un tema que consideró fundamental retomar en estos espacios: la propuesta que nuevamente se impulsa desde el Consejo Superior Universitario, liderada por el exrector Mauricio Alviar, para revisar, ajustar o reformar la dedicación a docencia en los planes de trabajo del profesorado.

Indicó que esta discusión ha comenzado a movilizar a los consejos de facultad, que ya están convocando reuniones con los docentes para informar y analizar el asunto. Señaló que nuevamente se plantea, como solución a la crisis financiera de la universidad, aumentar la carga de docencia directa de los profesores vinculados, con el objetivo de reducir la contratación de docentes de cátedra.

La profesora advirtió que este enfoque fue ampliamente cuestionado porque afecta el desarrollo de los ejes misionales de la universidad: docencia, investigación y extensión. Además, implica una afectación directa a los derechos laborales del profesorado, tanto de los vinculados, que verían incrementada su carga docente a expensas de otras funciones, como de los catedráticos, cuya contratación se reduciría drásticamente.

A su juicio, esto representa una nueva fase en el proceso de "adelgazamiento" de la universidad, propio de una lógica neoliberal que, lamentablemente, vuelve a ponerse en marcha desde las altas instancias de gobierno universitario.

Llama la atención sobre un punto que considera clave: desde el año pasado, la crisis en la Universidad no ha sido solo financiera, sino también política, ética y de género. No puede atribuirse únicamente a la falta de financiación nacional, aunque reconoce que es necesario ajustar la Ley 30. También se debe considerar el deficiente gobierno universitario que ha caracterizado a la institución durante años: una gestión sin planificación, sin control de costos, sin control político ni social desde ningún sector.

En este sentido, señaló que se ha concentrado la crítica en el rector y su equipo, pero se ha dejado de lado al Consejo Superior Universitario (CSU), que también hace parte del gobierno universitario. El CSU ha aprobado todos los planes de acción presentados por la Rectoría, ha avalado los presupuestos institucionales, y ha otorgado calificaciones positivas a los informes de gestión. A pesar de los múltiples llamados de alerta, denuncias y propuestas que se han hecho desde distintos sectores durante más de un año, el CSU ha permanecido sordo e inactivo.

Señaló que el CSU, hoy, evidencia su carácter político, incluso clientelista, y actúa en función de intereses particulares, desconectados del proyecto académico y cultural de una universidad pública. Invitó a toda la comunidad profesoral a reflexionar sobre esto y a pensar con urgencia qué vamos a hacer frente a un gobierno universitario que ha fallado gravemente en su responsabilidad histórica.

¿Se ha tenido algún anuncio de la administración de cuando nos pagarán los puntos de bonificación pendientes de 2024 y el retroactivo de puntos por productividad académica? Esos temas son un incumplimiento de nuestros derechos salariales contenidos en este caso en el reconocimiento de productividad del Decreto 1279.

La Representante profesoral ante el Consejo Académico, responde que se ha consultado y la respuesta ha sido la misma: que no saben nada al respecto. En marzo tampoco se hizo el corte correspondiente, y lo cierto es que ya hay dos cortes acumulados: el de septiembre de 2024 y el de marzo. Nos deben el corte de septiembre, y ahora también el de marzo, que es el que corresponde al cálculo de bonificaciones o puntos salariales.

Se ha insistido en los Consejos Académicos, y, por supuesto, junto con los representantes profesorales ante el CSU seguirán indagando cuando inicien sus labores en junio. Se suponía que este pago se iba a realizar en abril, y aunque se han recibido algunas comunicaciones, lo único que nos indican es que revisemos nuestra colilla de pago. Básicamente, nos envían un correo para que miremos si ya fue abonado, pero no hay una información clara ni oficial.

La Representante profesoral ante el CSU, menciona que, si el proceso de reconocimiento de puntaje, que ya era lento, ahora está completamente paralizado. No se expiden resoluciones, y sin resoluciones, no hay pagos. Así como se demoran en pagar a proveedores o a los profesores de cátedra, también se retrasa el reconocimiento de puntos. Y, por tanto, su pago. Se trata de una forma indirecta de recortar recursos: no reconocer retroactivos, no pagar los puntos en el tiempo correspondiente y así generar un ahorro a costa de nuestro trabajo.

Adicionalmente, viene el tema del retroactivo salarial. Sabemos que ya fue decretado, aunque el documento oficial aún no ha salido. Probablemente lo haga en los próximos días. Siempre que sale el decreto, se establece que el pago debe hacerse en un plazo corto. El año pasado, por ejemplo, se reconoció el 31 de diciembre. Entonces, se suma una nueva preocupación: cuándo se va a reconocer y cómo se va a pagar ese retroactivo.

En resumen, nos deben dos bonificaciones (septiembre y marzo), un retroactivo de puntos del año pasado, y ni siquiera se ha mencionado nada del retroactivo correspondiente a este año. Creemos que la situación del puntaje, su reconocimiento y el atraso sistemático en los pagos deben ser discutidos con profundidad.

Si el objetivo institucional es ahorrar recursos, una vía expedita ha sido precisamente esta: no reconocer puntos, no pagar retroactivos y trasladar toda la carga al profesorado. Y especialmente

al profesorado de cátedra, que ya enfrenta una situación muy precaria. No se nos paga lo que nos corresponde, y aun así se nos responsabiliza por la crisis. Es necesario abrir un debate más serio y estructural sobre este tema.

2. Intercambio con la Directora de Regionalización. Profesora Nora Eugenia Muñoz Franco

La directora comienza exponiendo que, este año se conmemoran 30 años del proceso de regionalización de la Universidad de Antioquia, iniciado en 1995 en Turbo. Ha sido un camino continuo de construcción universitaria en las regiones, influido por dinámicas territoriales y académicas. A lo largo de estas tres décadas, las decisiones sobre oferta académica se han fundamentado en estudios rigurosos, liderados por el INER, incluyendo diagnósticos y agendas de investigación actualizadas hasta 2023. Con estos insumos, se trabaja actualmente en la actualización del Plan Estratégico de Regionalización, cuyo objetivo es proyectar el futuro del proceso y fortalecer la presencia territorial.

También se adelanta un estudio macroregional para conocer las aspiraciones académicas de los jóvenes y establecer alianzas estratégicas con actores locales, reconociendo que la presencia universitaria debe adaptarse constantemente a los cambios del entorno. Los Comités Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (CUEES) han sido clave para la articulación con sectores regionales, fortaleciendo iniciativas educativas. Aunque la autonomía de las facultades determina su participación, se han implementado programas con enfoque territorial, como:

- Pedagogía, Ruralidad y Paz
- Ciencias del Mar en Turbo (pregrado a doctorado)
- Desarrollo Territorial
- Especialización en Café
- Proyectos como la Facultad de Ciencias de la Vida en Urabá y el Instituto de la Ruralidad en el suroeste

Finalmente, se avanza en la capacitación del personal administrativo regional, buscando mayor autonomía y eficiencia en un contexto de austeridad, con el fin de optimizar recursos y mejorar la gestión de los procesos misionales. La regionalización sigue siendo un proceso abierto, que requiere adaptación permanente frente a los retos actuales.

▪ Intervenciones:

¿Cómo se sostiene financieramente la regionalización de la Universidad de Antioquia y qué alianzas territoriales existen para su operación y expansión?

La Dirección de Regionalización expone que la Universidad de Antioquia tiene un modelo de regionalización único, basado en una presencia territorial permanente con sedes físicas en todas las subregiones de Antioquia, a diferencia de otras universidades (como la del Tolima o la Católica de Oriente), que operan con convenios temporales o sedes itinerantes.

Se han suscrito convenios con alcaldías municipales que permiten: desarrollo de proyectos académicos, investigativos y de extensión; apoyo a estudiantes en transporte, prácticas profesionales e investigación local; participación en políticas públicas locales. Sin embargo, el nivel de compromiso varía según la capacidad financiera de cada municipio.

La Universidad ha buscado recursos adicionales con gobiernos nacional, departamental y municipal. A pesar del discurso favorable, los aportes reales han sido limitados. Por ejemplo: de los \$37 mil millones anunciados por el Gobierno nacional, solo \$15 mil millones serían recursos nuevos. El resto corresponde a transferencias legales ya establecidas, según la información de la Vicerrectoría Administrativa.

En cuanto a la operación actual de la regionalización, es importante aclarar que esta está garantizada con recursos del Plan Integral de Cobertura (PIC), de carácter nacional. Adicionalmente, estamos participando en dos estrategias clave impulsadas por el Ministerio de Educación Nacional:

1. Educación Superior en tu Colegio: busca implementar programas de educación superior en instalaciones educativas ya existentes en municipios priorizados (en Antioquia: Arboletes, El Bagre y San Roque). El equipo técnico ya realizó visitas y estudios en estos municipios, y estamos en espera de que se hagan las adecuaciones necesarias (Findeter es un intermediador) y se desembolsen los recursos prometidos.
2. PETI (Programa de Tránsito Inmediato): enfocado en aumentar la tasa de acceso inmediato a la educación superior. En Antioquia, los municipios priorizados son Anorí y Arboletes. Inicialmente, se implementarán programas virtuales como Ingeniería, Creación Digital y Tecnología en Administración de Insumos Agropecuarios, mientras se gestionan los registros calificados para programas presenciales, siempre condicionados a la aprobación de las unidades académicas.

La Universidad no se comprometerá con nuevas sedes ni programas sin respaldo financiero estable y permanente. Las ofertas académicas iniciarán solo si se garantiza el desembolso de los recursos necesarios.

¿Qué se ha hecho específicamente con el presupuesto de 65 mil millones de pesos asignado en 2024 para regionalización, que representa el 8,6% del presupuesto total de la Universidad?

La Dirección de Regionalización está dispuesta a entregar un informe detallado sobre la ejecución presupuestal, con el respaldo de la Vicerrectoría Administrativa, dado que es de su competencia. La Universidad ha cumplido con todas las obligaciones derivadas de las matrículas semestrales de estudiantes en las sedes regionales, garantizando el desarrollo de las funciones misionales en los territorios.

Se enfatiza que la regionalización no es responsable de la crisis financiera de la Universidad. Las construcciones en sedes regionales se han financiado con recursos externos (regalías,

donaciones, estampilla, etc.), no del presupuesto ordinario. La situación financiera se atribuye a un modelo nacional de financiación obsoleto (Ley 30 de 1992).

También se explicó que las obras de infraestructura en las sedes regionales no se han financiado con el presupuesto ordinario universitario, sino con recursos externos como regalías, aportes de gobiernos locales, donaciones particulares y la estampilla universitaria. Un ejemplo destacado fue la construcción de dos laboratorios en Sonsón, financiados por la familia Isaza.

¿Cuál es la postura de la Dirección de Regionalización y de la administración frente al crecimiento de la virtualidad en la educación superior? ¿Se contempla una transición hacia unidades virtuales regionales, reduciendo infraestructura física? ¿Qué modelo de universidad se está construyendo ante estos cambios tecnológicos?

La Dirección de Regionalización reconoce que la virtualidad es una tendencia creciente, especialmente tras la pandemia, pero afirma que su implementación no debe ser impuesta ni decidida de forma unilateral. Subraya que la Universidad de Antioquia tiene una tradición basada en la presencialidad, complementada con herramientas tecnológicas como apoyo, pero sin reemplazar la experiencia formativa presencial.

Los programas virtuales que existen en las regiones han sido definidos por las unidades académicas, no por la Dirección de Regionalización.

La Dirección llama a abrir un debate institucional y participativo, sobre hacia dónde queremos dirigirnos como universidad frente a la virtualidad y cómo eso impactará la oferta regional, ya que no es un tema que pueda resolverse de manera aislada o técnica.

¿Qué modificaciones se han propuesto o implementado en el Estatuto General y en el Estatuto Profesorado que impacten directamente el proyecto de regionalización? ¿Cómo se articulan las reformas estatutarias con el desarrollo académico y con el plan de trabajo del profesorado en regiones?

Se ha identificado que los actuales estatutos generan obstáculos para el desarrollo pleno de las funciones misionales (docencia, investigación y extensión) en las regiones. En particular, la investigación y la extensión en regiones dependen muchas veces de la voluntad de profesores en Medellín para avalar o apoyar iniciativas, ya que en las regiones no existen profesores vinculados suficientes. Lo que generando desigualdad e impidiendo el fortalecimiento académico territorial. Hoy, solo hay cinco profesores vinculados en las sedes regionales, y están allí por solicitud propia, no por convocatorias específicas.

La reforma a los estatutos debe ser una prioridad institucional y un compromiso colectivo. Se ha planteado en el Comité de Regionalización la necesidad de incluir en la reforma elementos que reconozcan las particularidades territoriales, y actualmente estamos en diálogo con las vicerrectorías de Investigación y Extensión para asegurar que los nuevos sistemas incluyan disposiciones para las regiones.

Se indicó que cualquier cambio estructural en este aspecto depende del Consejo Superior Universitario (CSU), el único órgano con potestad para abrir convocatorias específicas. La Dirección ha llevado propuestas de reforma al Comité de Regionalización, al Comité General de Extensión y al CODI. También se están realizando diálogos con las Vicerrectorías de Investigación y Extensión para que las reformas en curso incluyan criterios diferenciados para las regiones.

Se indicó que cualquier cambio estructural en este aspecto depende del Consejo Superior Universitario (CSU), el único órgano con potestad para abrir convocatorias específicas. Sin embargo, desde la Dirección ya se han presentado propuestas al Comité General de Extensión y al CODI, así como una iniciativa de reforma al Estatuto General en el Comité de Regionalización.

En cuanto a la actividad docente, desde regionalización tienen mapeadas las funciones de las 62 plazas de profesores ocasionales que administramos: cuánto tiempo dedican a docencia, investigación y extensión. No obstante, el desarrollo misional en los territorios no es responsabilidad exclusiva de esta dirección. Las unidades académicas también tienen presencia y dinamizan proyectos de extensión e investigación, con los cuales colaboramos estrechamente.

Sin embargo, manifiesta que en ningún momento se ha negado viáticos a los profesores para su desplazamiento, salvo en casos donde la unidad académica informa oficialmente que una clase específica (no el curso completo) se realizará virtualmente. En todo momento se ciñen a la programación de las unidades académicas.

¿Qué papel está jugando la Gobernación de Antioquia en el fortalecimiento de las sedes regionales? ¿Con qué recursos se cuenta para consolidar las regiones sin sobrecargar a la planta docente ni debilitar el proyecto regional? ¿Existen estudios de viabilidad financiera rigurosos que respalden los nuevos proyectos regionales y su sostenibilidad a largo plazo?

Sobre el rol de la Gobernación de Antioquia, actualmente no hay un apoyo adicional al que ya está estipulado por ley. Según el reporte de la Vicerrectoría de Extensión, la contratación con Gobernación ha disminuido, y aunque con algunas alcaldías locales se ha incrementado ligeramente, también ha habido una baja en los contratos con el Gobierno nacional. Esto afecta la sostenibilidad, dado que una parte importante de los ingresos de la universidad proviene de la oferta de servicios a través de la extensión. Pese a estas limitaciones, la operación de las regiones está garantizada con recursos provenientes del PIB, lo que nos ha permitido sostenerlas.

La Dirección de Regionalización trabaja en un plan de extensión en regiones y buscando fuentes externas de financiación, incluyendo proyectos que generen ingresos por medio de bolsas especiales que ayuden a cubrir gastos operativos y fortalecer la extensión solidaria y seguir operando sin comprometer la calidad.

¿Qué medidas se están tomando para garantizar el cumplimiento de las funciones misionales (docencia, investigación y extensión) en todos los campus, incluyendo el bienestar docente y

estudiantil? ¿Cuál es el plan para territorios como Amalfi, el Nordeste, Segovia y Remedios, que presentan retos como la falta de directores de sede y pocos programas activos?

¿Cómo se planea crecer en oferta académica sin resolver los problemas de infraestructura básica, como la falta de conectividad y servicios adecuados en sedes como Andes? ¿La apertura de programas en regiones se basa en una extensión de lo existente en Medellín o en propuestas diseñadas con una perspectiva territorial clara? ¿Qué estrategias específicas impulsa la Dirección de Regionalización para lograr una verdadera articulación entre las facultades, los programas y las realidades de cada región?

Respecto a la conectividad, aclara que la Universidad no tiene control directo sobre la infraestructura de redes en los territorios. Si bien la institución procura garantizar el acceso a Internet, muchas veces las limitaciones obedecen a condiciones externas, como la calidad del servicio en la zona.

En cuanto a la Facultad de Ciencias de la Vida, es un proyecto en formulación, liderado por la Facultad de Medicina. Aún no hay definiciones concretas, ya que se está gestionando el acceso a recursos externos. Hasta que no estén garantizados, no es posible avanzar en su ejecución.

Respecto a la oferta de programas en regiones, están trabajando en dos frentes: uno, con base en estudios previos de pertinencia regional, que actualmente están actualizando a través de un estudio macro institucional que permitirá tener un panorama claro en marzo del próximo año. Esto responde a los cambios en la vocación y desarrollo de los territorios —como ocurre, por ejemplo, en Urabá, con las transformaciones asociadas al puerto—.

El otro frente es la coordinación directa con las unidades académicas, que además de los estudios que realizan desde regionalización, éstas hacen sus propias visitas y evaluaciones antes de llevar un programa a una sede. La oferta semestral depende de los programas con registro calificado vigente para región, y se construye en conjunto. A la par, estamos postulando este estudio de pertinencia a recursos CODI para financiarlo sin requerir inversión adicional.

Finalmente, el crecimiento de la oferta académica estará condicionado tanto por los resultados de ese estudio como por las decisiones institucionales de carácter estratégico. No es una decisión unilateral de la dirección de regionalización, sino una conversación que involucra a todas las dependencias comprometidas con el desarrollo regional.

¿Qué estudios financieros respaldan las decisiones de expansión en regiones? ¿Qué garantías hay de que los recursos prometidos llegarán y sostendrán los nuevos compromisos adquiridos?

En cuanto a las prácticas estudiantiles, los recursos están garantizados para aquellas que son obligatorias dentro del plan de estudios. Esto incluye el transporte y la operación logística necesaria. No podemos asumir el costo de prácticas extracurriculares o actividades que no estén explícitamente incluidas en la programación académica, porque simplemente no contamos con los recursos suficientes para ello.

Cuando los profesores vinculan a estudiantes en proyectos de investigación o extensión, deben prever desde el inicio los costos de transporte y logística para su participación. Regionalización no puede cubrir esos gastos adicionales. Lo mismo aplica para solicitudes de último minuto para asistir a eventos académicos: si el proyecto no lo prevé y no está contemplado en el presupuesto, no es posible aprobar esos apoyos sin afectar los recursos que deben destinarse a las funciones misionales obligatorias.

Por último, frente a los laboratorios e infraestructura, contamos con 32 laboratorios en Oriente, 2 en Urabá, 2 en Sonsón y 12 en Puerto Berrío. Las prácticas académicas asociadas a esos espacios están garantizadas porque son parte integral del diseño curricular. Los insumos requeridos son enviados a las sedes conforme son solicitados y aprobados, y puedo asegurar que esto se gestiona con responsabilidad y cumplimiento.

¿Qué acciones concretas se implementarán para fortalecer la política de género en las regiones, donde a menudo se subestiman o no se responden adecuadamente los casos de violencia de género?

¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la democracia universitaria en las regiones, incluyendo asambleas regionales y la presencia de representantes del profesorado en los órganos de decisión como el CSU y el Consejo Académico?

La directora manifestó que, frente al tema de los asuntos de género en las regiones, actualmente están trabajando de manera articulada con la Dirección de Bienestar Universitario y la Ruta Violeta para fortalecer la atención en estos territorios. Sin embargo, es fundamental que esta atención vaya acompañada de procesos educativos y de promoción que permitan identificar otras dimensiones del problema y prevenir situaciones de violencia.

Es cierto que puede haber subregistro. Aunque algunos casos se reportan directamente a las coordinaciones de bienestar, también es común que muchas personas decidan no denunciar formalmente. Este es un límite legal importante: si la persona no formaliza la denuncia, la universidad no puede avanzar en el proceso. Eso lo hemos aprendido escuchando al equipo jurídico de la Ruta Violeta.

Desde la universidad estamos explorando la posibilidad de conformar comités de género en las regiones, aunque no ha sido fácil. Lo intentamos, por ejemplo, en Yarumal, pero la participación ha sido baja. A pesar de ello, seguimos en conversaciones con Bienestar para lograr mayor presencia territorial en estos casos y asegurar el acompañamiento en los procesos que ya están en curso. No negamos que existan situaciones de violencia en las regiones; por el contrario, somos conscientes de su presencia y trabajamos con los recursos disponibles para abordarlas.

Coincidimos plenamente en que es necesario fortalecer la presencia institucional en las regiones, tanto en términos de bienestar estudiantil como de enfoque de género. Reconocemos que hay

un subregistro de violencias de género y que algunas sedes reportan erróneamente ausencia de problemas, lo cual evidencia la necesidad urgente de mejorar la atención y prevención.

También es crucial democratizar más la vida universitaria en las regiones. Necesitamos fortalecer los comités de género, facilitar asambleas regionales, y garantizar que representantes profesoriales del Consejo Académico y el CSU puedan visitar las regiones, no solo conectarse por video.

Desde la Dirección de Regionalización estamos comprometidos con generar condiciones para que estas presencias y espacios se fortalezcan. Reiteramos nuestra disposición para articular acciones con otras dependencias y con los colectivos organizados, como la Asamblea de Mujeres y Disidencias Multiestamentarias.

En cuanto a bienestar universitario, reconocemos que aún hay retos, pero hemos avanzado. Hoy todas las sedes cuentan con una coordinación de bienestar. Además, disponemos de servicio de psicoorientación —no con un profesional por sede, pero sí con cobertura— y estamos gestionando la contratación de un nuevo psicoorientador para Andes. También hay estrategias de alimentación y se ha promovido la movilidad estudiantil. Sabemos que aún falta, pero el esfuerzo institucional es constante.

En relación con la presencia de representantes profesoriales en las regiones, ese es un tema que debe estudiarse con la Vicerrectoría Administrativa, ya que implica recursos. Si queremos garantizar espacios de participación efectiva, también debemos asegurar la viabilidad logística y presupuestal para que esa participación sea posible.

Sobre el impacto de la regionalización, las unidades académicas pueden dar cuenta de sus avances, pero con el estudio de pertinencia que estamos desarrollando, tendremos datos actualizados y precisos en marzo del próximo año. Este estudio nos permitirá medir mejor el impacto de la universidad en los territorios y orientar nuestras decisiones. Sin embargo, ya podemos afirmar que el 79 % de los egresados permanecen en sus regiones y aportan desde allí, lo cual evidencia un impacto positivo.

Uno de los desafíos actuales es evitar la saturación de profesionales de un mismo programa en un territorio. Por eso estamos impulsando una oferta académica itinerante que funcione por cohortes. Esto permite diversificar la formación sin comprometer la empleabilidad en contextos regionales donde las oportunidades son limitadas.

La pertinencia sigue siendo una preocupación central. Estamos incluyendo actores clave — unidades académicas, gobiernos locales, organizaciones sociales, sector empresarial y comunidades— para tener una visión más amplia y certera. El estudio en curso nos permitirá fortalecer esta articulación y tomar decisiones más informadas.

¿Existe alguna orientación institucional o plan para revisar y ajustar los viáticos asignados al profesorado que presta sus servicios en territorio, dado que los valores actuales no son suficientes para cubrir los costos básicos, especialmente en el caso de cátedra?

Respecto a los viáticos y el apoyo logístico, quiero ser enfática: Regionalización no niega viáticos a profesores para dictar clases en las regiones. Solo en los casos en que una unidad académica solicita oficialmente que una clase puntual (no todo un curso) se imparta de forma virtual, es que prescindimos del viático. En ningún caso esta Dirección decide qué modalidad debe adoptar una unidad académica: simplemente administramos los recursos de acuerdo con lo programado y aprobado por las facultades. Los viáticos, estos están regulados por una tabla aprobada por el Consejo Superior Universitario. Sé que ya se ha discutido el tema, pero cualquier cambio debe tramitarse formalmente en ese espacio. Por ahora, no hay una nueva tabla definida, pero ustedes, como representantes, podrán hacer seguimiento directo al avance de esta discusión.

Por último, plantea que la regionalización no es un proyecto acabado. Es un proceso en construcción, que requiere diálogo, recursos y articulación con múltiples actores. No se puede esperar que desde la Dirección de Regionalización se resuelvan todas las necesidades, porque muchas decisiones dependen del presupuesto disponible y del compromiso de las unidades académicas.

Regionalización actúa como un puente entre los territorios y las unidades académicas. En ese marco, por ejemplo, los laboratorios existentes están en funcionamiento. En el caso de Sonsón, donde aún no están dotados, se está gestionando la donación de equipos por parte de la familia Isaza, que ha apoyado significativamente el desarrollo de esta sede. Si no fuera por ese aporte, hoy no tendríamos cómo dotar esos espacios, ya que actualmente no existen recursos asignados para nuevas obras o construcciones, ni en la sede central ni en las regiones.

Actualmente se actualiza un estudio macro de pertinencia regional, con resultados proyectados para marzo del próximo año. Esto permitirá tomar decisiones informadas sobre la apertura y continuidad de programas en los territorios, considerando las necesidades locales, la empleabilidad y la transformación económica de las subregiones (como en Urabá, con el desarrollo portuario).

Se está promoviendo un modelo de oferta itinerante por cohortes, que permita diversificar la formación sin saturar el mercado laboral regional. Las decisiones sobre la expansión académica son concertadas con las unidades académicas y dependen del análisis conjunto de pertinencia, demanda y viabilidad institucional.

¿No cree que la insistencia en ofrecer programas solo para captar recursos podría estar afectando negativamente las finanzas de la universidad?

Además, si la Dirección de Regionalización no tiene capacidad real de decisión, ¿no deberíamos replantear su papel y dejar que las unidades académicas lideren estos procesos? Hoy tenemos

muchas dudas sobre la viabilidad financiera y el rol estratégico de la regionalización en la universidad, ya que percibimos falta de articulación y decisiones sin estudios previos. ¿Qué garantías reales existen de que esto se está gestionando con criterio técnico y sostenible?

La directora de regionalización expresó: no comparto la percepción de fragmentación. En sus palabras, lo que ve es un esfuerzo de articulación, porque la regionalización atraviesa toda la vida universitaria. No es un ente aislado, sino que debe responder a la visión institucional y a sus misiones fundamentales.

Desde la Dirección de Regionalización no actuamos como una isla. Somos responsables de coordinar y dinamizar los procesos misionales en las regiones, pero siempre en articulación con las estructuras formales de la Universidad de Antioquia: docencia, investigación y extensión. Sería un error actuar de manera autónoma sin tener en cuenta esas instancias.

En ese sentido, sí contamos con estudios de costos por estudiante. Tal vez no los tengo todos en la cabeza ahora mismo, pero como me comprometí, el informe se presentará en conjunto con el Vicerrector Administrativo. La Dirección de Regionalización no trabaja sola. Tenemos una coordinadora administrativa y todo lo que hacemos está articulado con las vicerrectorías y con las unidades académicas. Porque todo lo que ocurre en regionalización forma parte de la Universidad de Antioquia. No estamos creando una universidad paralela.

La Universidad tiene normativas y orientaciones claras en materia de planeación, y yo no puedo, ni debo, actuar al margen de esas estructuras. Por eso insisto: no es fragmentación, es articulación. Y esa articulación es un proceso cotidiano, porque la universidad es dinámica, se adapta a los territorios, a las personas, y eso implica una revisión permanente de lo que hacemos. Siempre habrá oportunidades de mejora, porque quienes ejecutamos la misión institucional somos personas, y cada contexto nos exige nuevos retos.

En cuanto al tema financiero, los estudios de costos —por estudiante, por cohorte y por sede— serán incluidos en el informe. Como mencioné, me gustaría que el Vicerrector Administrativo nos acompañara en una próxima Asamblea para explicar esos análisis con el detalle técnico que corresponde. Yo también puedo traer la información, pero él podría responder más adecuadamente a ciertas preguntas.

Respecto a los programas virtuales, los estudiantes están debidamente matriculados y los programas cuentan con registro SNIES asociado a las regiones. Además, el 20 % de su formación requiere presencialidad, y ellos deben presentarse en sus respectivos territorios para los exámenes, conforme a lo establecido en cada programa.

Y sobre la inquietud respecto al seguimiento de estudiantes en programas virtuales, sí se está haciendo ese rastreo, particularmente en lo que respecta a los reportes para el Ministerio.

¿Cómo está respondiendo la universidad a las verdaderas necesidades laborales y territoriales de las regiones, considerando la alta demanda de programas en sedes regionales, la saturación

de egresados sin empleo local, y las dificultades de acceso a cursos clave como los de segunda lengua?

Primero, el hecho de que personas ya profesionales busquen nuevos estudios no es exclusivo de las regiones; también lo observamos en Medellín y en otras universidades. En regiones, se da además porque no todos los programas están disponibles en todos los territorios, y muchos se trasladan a otras sedes para acceder a la formación que desean.

Respecto a la oferta académica, es cierto que no podemos llevar todos los programas a todas las regiones. La capacidad instalada no lo permite, y tampoco siempre hay demanda suficiente para sostener un programa de manera permanente. Algunos programas se mantienen porque históricamente han tenido alta demanda, como Psicología o Trabajo Social.

En cuanto a su pregunta sobre la pertinencia de la oferta académica en relación con la vocación territorial, estamos conscientes de que no basta con alinear la formación con las características productivas del territorio. También debemos escuchar a los jóvenes, quienes finalmente son los que se matriculan. Ha habido casos donde ofertamos programas con alta pertinencia regional, pero no se inscriben suficientes estudiantes, y hemos tenido que cerrarlos por no cumplir con el número mínimo.

Sobre la deserción, la Dirección de Bienestar Universitario ha identificado que las principales causas son socioeconómicas y familiares. En muchos hogares rurales aún se considera más valioso que los hijos trabajen que estudien. Además, hay dificultades reales de movilidad, alimentación y conectividad. Para contrarrestarlo, hemos implementado becas, subsidios de transporte y estamos ampliando la cobertura del servicio de alimentación.

Respecto a la enseñanza de segunda lengua, entendemos perfectamente la dificultad. Es un tema que requiere ajustes estructurales. Se han hecho esfuerzos, pero aún no hay una solución definitiva. Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de acceso y permanencia, incluyendo horarios más flexibles y una modalidad más adecuada para quienes deben desplazarse largas distancias.

Respuesta adicional sobre los costos y compromisos

Quiero aprovechar para hablar del compromiso asumido en relación con los informes de costos. Me parece importante que toda la comunidad universitaria conozca la situación financiera actual de la universidad y, dentro de ello, los costos de operación de la regionalización. En ese sentido, reafirmo el compromiso de presentar un informe financiero en conjunto con la Vicerrectoría Administrativa.

Sobre su inquietud respecto a la posibilidad de facilitar reuniones de claustro en las regiones: he sabido que, en algunas sedes, como en Urabá, los profesores ya se reúnen de forma autónoma. Yo misma he estado en esas reuniones cuando visito el territorio. Sin embargo, si no hay

suficientes profesores en una sede para organizar un claustro formal, no puedo comprometerme a crear plazas o ampliar la planta docente, ya que eso no está en mis competencias.

Lo que sí podemos hacer es facilitar la articulación con los docentes de cátedra y ocasionales, para que, con el apoyo del Comité de Regionalización, podamos planificar espacios deliberativos, apoyar logísticamente y fortalecer los canales de comunicación.

Sugiero que la representante del profesorado en el Comité de Regionalización sirva como enlace entre la Dirección y los docentes de las regiones. A través de ella, podríamos canalizar las solicitudes y coordinar acciones.

Agradezco de nuevo este espacio de conversación. Ha sido muy valioso y enriquecedor.

3. Propositiones y Varios

- Comunicado: Se acordó emitir un comunicado sobre la crisis financiera, los planes de trabajo, la contratación de profesores de cátedra y las violencias basadas en género.
- Asamblea Extraordinaria: Se propuso invitar al vicerrector administrativo y a la vicerrectora de docencia para discutir los planes de trabajo y dedicaciones exclusivas.
- Acceso a Información: Se sugirió solicitar acceso a las bases de datos de correos institucionales para mejorar la comunicación con el profesorado, también en las regiones para coordinar espacios deliberativos.
- Ruta Violeta: Se destacó la necesidad de fortalecer la ruta violeta en las regiones para atender casos de violencia de género.
- Modelo de Planeación: Se discutió la necesidad de un modelo de planeación prospectiva que incluya la diversidad de las regiones.

Compromisos

Asamblea:

- Redactar un comunicado sobre la crisis financiera, los planes de trabajo, la contratación de profesores de cátedra y las violencias basadas en género.
- Coordinar una Asamblea extraordinaria con el vicerrector administrativo y la vicerrectora de docencia, con los temas: planes de trabajo y dedicaciones exclusivas.
- Facilitar la comunicación con profesores de cátedra y ocasionales en las regiones para coordinar espacios deliberativos.

Directora de Regionalización:

- Proporcionar un informe detallado sobre la ejecución presupuestal, con el respaldo de la Vicerrectoría Administrativa, dado que es de su competencia. (costos de operación de la regionalización)

- Facilitar la presentación de la información financiera de la dirección de regionalización.
- Coordinar con el vicerrector administrativo para una presentación en la Asamblea.

Representación profesoral ante el CA:

- Continuar trabajando en la articulación del profesorado a través del Ateneo profesoral.

Conclusiones

La asamblea concluyó con un llamado a la acción para abordar la crisis financiera, mejorar la comunicación y fortalecer la democracia universitaria. Se acordó realizar un seguimiento de los compromisos adquiridos y continuar con el diálogo entre los diferentes actores de la universidad.